



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe

Número:

Referencia: Exp. 2018-00647608-APN-SIGEN - AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

Informe Evaluativo del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Acceso Norte

Vienen las presentes actuaciones a consideración de esta Dirección Nacional de Vialidad (la “DNV”), a los fines de que se proceda a emitir opinión sobre el proyecto de Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Acceso Norte (el “Acuerdo Integral”).

Cabe destacar que, a la fecha de emisión del presente, ya se pronunciaron sobre dicho Acuerdo Integral la Procuración del Tesoro de la Nación, mediante el Dictamen IF-2017-34134193-APN-PTN (el “DICTAMEN PTN”), de fecha 21 de diciembre de 2017, y la Sindicatura General de la Nación, a través del Informe IF-2018-05661294-APN-GAJ#SIGEN (el “DICTAMEN SIGEN”), de fecha 2 de febrero de 2018.

Tanto el DICTAMEN PTN como el DICTAMEN SIGEN se pronunciaron respecto a la continuidad del trámite de aprobación del Acuerdo Integral. Al mismo tiempo, formularon ciertas sugerencias y recomendaciones en relación con aspectos del Acuerdo Integral, que fueron tomadas en cuenta según resulta de las adecuaciones a su texto formuladas por la DNV y por la empresa AUTOPISTAS DEL SOL S.A. (el “Concesionario”).

Por otra parte, en el DICTAMEN PTN y en el DICTAMEN SIGEN se puso de manifiesto la conveniencia de contar con un pronunciamiento expreso del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES (el “ex OCCOVI”) sobre el Acuerdo Integral.

Al respecto, cabe destacar que de las constancias obrantes en el expediente surge que, en forma previa a la emisión del DICTAMEN PTN y del DICTAMEN SIGEN, tuvo lugar la intervención de distintas áreas del ex OCCOVI, las que produjeron informes y documentos relativos al Acuerdo Integral.

Sin perjuicio de ello, corresponde dar respuesta al señalamiento formulado al respecto en el DICTAMEN PTN y en el DICTAMEN SIGEN, mediante la producción de un documento integrador que plasme el informe requerido.

En cuanto al órgano que debe emitir dicho informe, cabe tener presente que el 11 de enero de 2018 se publicó el Decreto N° 27/2018, que en sus artículos 54 y 57 dispuso la disolución del ex OCCOVI y la transferencia de sus competencias, objetivos y funciones a la DNV. En consecuencia, corresponde a esta DNV emitir el informe sobre el Acuerdo Integral mencionado en el DICTAMEN PTN y en el DICTAMEN SIGEN.

I. Antecedentes

Según surge del Decreto N° 367/2016, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió concluir el proceso de renegociación contractual dispuesto por el Artículo 9° de la Ley N° 25.561, en relación con todos aquellos contratos en los que, como es el caso del Contrato de Concesión del Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el “Contrato de Concesión” y el “Acceso”, respectivamente), ese proceso no se hubiere aún completado.

Como es sabido, a principios de 2002 el artículo 8° de la Ley N° 25.561 dispuso medidas que afectaron la ecuación económico financiera de muchos contratos públicos en curso a esa fecha, incluida la Concesión. En virtud de ello, el Contrato de Concesión quedó comprendido en el proceso de renegociación ordenado en el artículo 9° de la mencionada Ley N° 25.561.

En el caso del Contrato de Concesión, este proceso de renegociación se ha extendido a lo largo de más de dieciséis años, de lo que resulta la necesidad de darle un cierre definitivo que posibilite la optimización del servicio para atender las necesidades actuales de la Concesión.

En este sentido, cabe recordar que en diciembre de 2005 se celebró el Acuerdo de Renegociación Contractual, entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (la “UNIREN”), por una parte, y el Concesionario, por otra parte (el “Acuerdo de Renegociación Contractual”), el que fue aprobado por el Decreto N° 296/2006.

Dicho Acuerdo de Renegociación Contractual implicó una recomposición parcial de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión y previó el desarrollo de una futura “Instancia de Revisión” que permitiera “recomponer la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión” (la “Instancia de Revisión”).

Dicha Instancia de Revisión no fue concretada dentro del plazo fijado al efecto en el Acuerdo de Renegociación Contractual y, en cambio, a requerimiento del Estado Nacional (el “Concedente”), se dispusieron sucesivas prórrogas, la última de las cuales expiró el 31 de enero de 2011, sin que la Instancia de Revisión se encontrase por entonces cumplida.

En ese contexto, el 3 de julio de 2015 el Concesionario presentó un reclamo administrativo previo ante el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el que solicitó que el Concedente hiciese efectiva la recomposición de la ecuación económica del Contrato de Concesión, además de formular reserva del reclamo de todos los daños ocasionados por la falta de recomposición oportuna del equilibrio contractual y por otros incumplimientos planteados en dicha presentación.

Con posterioridad, uno de los accionistas del Concesionario, la firma Abertis Infraestructuras S.A., inició un arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje sobre Disputas de Inversión (el “CIADI”). En dicho procedimiento, con base en lo previsto en Tratados de Protección Recíproca a las Inversiones de los que la Argentina es parte, se formula un reclamo patrimonial que, proyectado sobre la totalidad del capital de la empresa, arrojaría la suma de U\$S 1.135 millones de dólares.

A partir de 2016, en virtud de lo previsto en el Decreto N° 367/2016, se han llevado adelante las tratativas mediante las cuales fue posible acordar, entre la DNV y el Concesionario, el entendimiento plasmado en el Acuerdo Integral, con el objeto de concluir el proceso de renegociación contractual dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 25.561.

II. Principales términos y condiciones del Acuerdo Integral

El Acuerdo Integral tiene por objeto concretar la Instancia de Revisión prevista en el Acuerdo de Renegociación Contractual y recomponer en forma definitiva el Contrato de Concesión, además de fijar los términos y condiciones que regirán los derechos y obligaciones de las Partes.

En esencia, el Acuerdo Integral contempla: (i) el pago de inversiones no amortizadas al Concesionario al 31 de diciembre de 2016 (“Inversión Bruta”); (ii) la ampliación del plazo de la Concesión a efectos de posibilitar el repago de las inversiones no amortizadas con los ingresos generados por la Concesión en virtud de los niveles tarifarios razonables que se contemplan al efecto; (iii) la incorporación de un nuevo Plan de Inversiones con el objeto de llevar a cabo obras que permitan la mejora y optimización del servicio; (iv) el cierre de los reclamos cruzados, actuales o potenciales, entre el Concedente y el Concesionario y sus accionistas; y (iv) la redefinición de los derechos y obligaciones de las partes en el Contrato de Concesión, mediante la incorporación de las precisiones y adecuaciones necesarias sobre la base de la experiencia recogida en el desarrollo de la Concesión.

Siguiendo el orden antedicho, cabe señalar que en el Acuerdo Integral se ha acordado el pago al Concesionario de un monto de U\$S 540.522.269,52 en concepto de inversión no amortizada al 31 de diciembre de 2016 (“Inversión Bruta”).

El Concesionario ha aceptado que de ese monto se deduzcan las multas aplicadas e impagas, que totalizan el monto U\$S 41.522.269,52, al tipo de cambio previsto (las “Multas Aplicadas”).

Según lo establecido en el Acuerdo Integral, el monto de las Multas Aplicadas se deduce de la Inversión Bruta. En consecuencia, el monto resultante a pagar al Concesionario en el Acuerdo Integral es de U\$S 499.000.000 (la “Inversión Neta”).

El monto a pagar al Concesionario resulta significativamente inferior al que surge de proyectar las pretensiones de uno de sus accionistas en el CIADI, y también es más bajo que el que arrojan otras posibles variantes de cómputo contempladas en el reclamo económico del Concesionario.

De acuerdo con esos cálculos, basándose en el Registro de Inversiones de la Concesión, en la tasa interna de retorno del negocio, en el cálculo financiero de los ingresos no percibidos o en la proyección del reclamo de uno de los accionistas del Concesionario en el CIADI, el monto de la obligación generada por la inversión no amortizada que se pretende en los diversos planteos supera al del Acuerdo Integral. Cabe destacar, además, que la tasa interna de retorno en dólares del Concesionario, que originariamente era del 13,06%, se reduce al 8%.

En el Acuerdo Integral no se reconoce al Concesionario el derecho a la rentabilidad o las ganancias proyectadas en su oferta, sino sólo el derecho a recuperar la Inversión Neta.

Se prevé que el repago de la Inversión Neta debe efectuarse durante el plazo de la Concesión, el que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 (aunque dicho plazo puede ser abreviado, por decisión del Concedente, desde el 31 de diciembre de 2026, si para entonces ya se produjo la amortización total de la Inversión Neta).

La ampliación del plazo de la Concesión tiene en consideración que el plazo actual de vigencia expira el 31 de diciembre de 2020, lapso en el cual no resulta factible recomponer la ecuación económica financiera del Contrato de Concesión sólo a través de incrementos tarifarios en niveles razonables como los que se establecen en el Acuerdo Integral. En función de ello, deviene necesaria la correspondiente extensión del plazo de duración de la Concesión, a fin de alcanzar la recomposición de la ecuación económico-financiera del Contrato de Concesión a una tasa interna de retorno de 8%.

Por otra parte, como ya se adelantó, se ha incorporado un nuevo Plan de Inversiones por un monto superior a AR\$ 7.300 millones, valorados a septiembre de 2016, que tiene por objeto actualizar la infraestructura del Acceso y dar un adecuado servicio a los usuarios, y que comprende inversiones en infraestructura vial, en obras y en actualización de sistemas y operación.

Las inversiones en infraestructura vial, junto con las inversiones en otras obras, corresponden a obras prioritarias de seguridad vial y de ampliación de capacidad. Además, se prevén obras de expansión y de vinculación mejorando las condiciones de acceso, de confort, y de tiempos de demora. Por otra parte, se

prevé la adquisición de tecnología para la detección y atención de incidentes en el Acceso, la mejora en los sistemas de información con el usuario y la modernización de los aspectos edilicios de la Concesión.

Paralelamente, en el Acuerdo Integral dispone que el Concesionario desistirá de todos los reclamos, actuales o potenciales, contra el Concedente, de causa anterior a la fecha del Acuerdo Integral, fundados en la situación de emergencia invocada en la Ley N° 25.561 o en alegados incumplimientos del Contrato de Concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior. Asimismo, el Concesionario se obliga a obtener de sus accionistas principales el compromiso de renunciar a sus respectivos reclamos o demandas.

Finalmente, en el Acuerdo Integral se han introducido adecuaciones y precisiones sobre distintos aspectos del Contrato de Concesión, teniendo en consideración la experiencia acumulada en estos años y las modificaciones que en él se introducen.

III. Conclusiones

El objetivo principal de esta renegociación contractual plasmada en el texto del Acuerdo Integral es restablecer el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión y la ejecución de obras e inversiones fundamentales para el desarrollo vial del Gran Buenos Aires y la optimización del servicio prestado por el Concesionario.

Merced a la extensión del plazo de la Concesión, se posibilita el inicio inmediato por parte del Concesionario de la ejecución de las obras.

En virtud de las consideraciones precedentes, es opinión de esta DNV que la celebración del Acuerdo Integral y su aprobación definitiva por el Poder Ejecutivo Nacional constituye una medida que brinda adecuado cumplimiento a la legislación aplicable y a los compromisos asumidos previamente por el Estado Nacional, en términos y condiciones razonables y convenientes para el interés público.